



ALBOAN

## Incorporando los Derechos Humanos en las instituciones financieras y de comercio internacionales: logros y perspectivas



Bizkaiko Foru  
Aldundia  
Diputación  
Foral de Bizkaia

EUSKO JAURLARITZA

ETXEBORDITZA ETA GIZARTE  
GABETAKO SAILA  
Gizarte Gaitasuko Subunioinetako  
Gonapen Lanbidekerako Zuzendaritza



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y  
ASUNTOS SOCIALES  
Viceconsejería de Asuntos Sociales  
Dirección de Cooperación al Desarrollo



Esta publicación forma parte de una colección de 5 investigaciones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si tienes interés en profundizar en este tema disponemos también de otros materiales complementarios (cómic, pósters, cuadernos de trabajo...), que los puedes solicitar en cualquiera de nuestras oficinas o en nuestra página web.

## Investigaciones ALBOAN

1. De la ciudadanía local a la global y de la ciudadanía global a la local. El camino andado. (2006)
2. Participación ciudadana y sistematización de experiencias. (2007)
3. Zenbakiez haratago: la cooperación al desarrollo vasca a debate. (2007)
4. El voluntariado internacional: una experiencia de implicación y diálogo intercultural. Una experiencia para aprender. (2007)
5. La deuda insoportable. (2008)
6. Mecanismos internacionales de financiación del desarrollo: la tasa Tobin y la “International Finance Facility”. (2008)
7. Incorporando los Derechos Humanos en las instituciones financieras y de comercio internacionales: logros y perspectivas. (2008)

## Incorporando los Derechos Humanos en las instituciones financieras y de comercio internacionales: logros y perspectivas



Edita:

**ALBOAN**

Padre Lojendio 2, 2º • 48008 Bilbao  
Tel.: 944 151 135 • Fax: 944 161 938  
alboanbi@alboan.org

Avenida Barañain 2 • 31011 Pamplona  
Tel.: 948 231 302 • Fax: 948 264 308  
alboanna@alboan.org

C/ Ronda 7, 4º I • 20001 San Sebastián  
Tel.: 943 275 173 • Fax: 943 320 267  
alboangi@alboan.org

[www.alboan.org](http://www.alboan.org)

Autoría: Felipe Gómez Isa

Fecha: marzo 2008

Diseño y Maquetación: Marra, S.L.

Imprime: Lankopi S.A.

Depósito Legal: BI-533-08

ISBN: 978-84-612-2232-2

---

Se autoriza la reproducción parcial de esta obra, siempre que ésta no tenga fines comerciales y la fuente sea citada.

# Índice

## **Incorporando los Derechos Humanos en las instituciones financieras y de comercio internacionales: logros y perspectivas**

I. Introducción	5
II. Evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos	8
III. Las Instituciones Financieras y de Comercio Internacionales (IFCIs) ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos	12
IV. Empresas Transnacionales: hacia una mayor exigencia de responsabilidad	15
V. La privatización desde una perspectiva de Derechos Humanos	19
VI. Intentos de incorporar las preocupaciones por los Derechos Humanos en las actividades de las IFCIs	30
VII. Algunas propuestas para incorporar los Derechos Humanos en las IFCIs	36



# INCORPORANDO LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE COMERCIO INTERNACIONALES: LOGROS Y PERSPECTIVAS

---

*Felipe Gómez Isa\**

## I. INTRODUCCIÓN

La globalización se ha convertido en una de las principales fuerzas impulsoras de nuestro tiempo. Si bien dicha globalización ofrece unas enormes oportunidades en términos de nuevas tecnologías, comunicaciones instantáneas y un gran crecimiento económico en algunas partes del mundo, al mismo tiempo existe una creciente preocupación por sus impactos en el ámbito de los Derechos Humanos. De acuerdo con la *Declaración del Milenio*, aprobada solemnemente en las Naciones Unidas en septiembre del año 2000,

“la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual... Consideramos que sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos... se podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa”.<sup>1</sup>

Uno de los aspectos más interesantes es que la Asamblea General de las Naciones Unidas está clamando por una globalización que sea “plenamente

---

\* Profesor de Derecho Internacional Público e investigador en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

<sup>1</sup> *Declaración del Milenio*, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 55/2, de 8 de septiembre de 2000. *Mundialización* es el término que se suele utilizar en los países de habla francesa para referirse a la globalización, siendo dos términos equivalentes.

*incluyente y equitativa*” (la cursiva es nuestra), un pronunciamiento que demuestra claramente que el actual proceso de globalización no camina en esa dirección. Al contrario, lo que observamos es que dicho proceso viene caracterizado por ser generador de exclusión y de extremas desigualdades, lo que plantea serias dudas desde el punto de vista de los Derechos Humanos, tanto los civiles y políticos como, sobre todo, los económicos, sociales y culturales. Estas preocupaciones vienen siendo compartidas desde diferentes instancias, entre las que destacan la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (IFCTU en sus siglas en inglés), quien enfatizó, en el marco de un Día General de Discusión convocado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para analizar el tema de la globalización y sus impactos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, que “el mercado global es un mecanismo muy poderoso para un crecimiento económico dinámico, pero también puede conducir a la exclusión y marginación de millones de ciudadanos ordinarios que no cuentan con las ventajas de la riqueza o del status. El mercado tiene que ser armonizado y tener en cuenta otro tipo de intereses”.<sup>2</sup>

El proceso de globalización también está teniendo un fuerte impacto en los actores que se han convertido en relevantes tanto a escala nacional como internacional. Las dinámicas de la globalización, caracterizada por una creciente liberalización financiera y comercial, por una intensa desregulación, por una progresiva reducción de las barreras a la inversión extranjera y por amplios procesos de privatización (todas ellas medidas que se pueden encuadrar en lo que se ha dado en llamar el *Consenso de Washington*), están teniendo como consecuencia una dramática reducción del papel del Estado en la economía y en la sociedad. Como resultado de todo ello, sectores que previamente estaban cubiertos por el sector público se están dejando progresivamente en manos del mercado. Esto está teniendo como consecuencia un debilitamiento de la protección de los Derechos Humanos por parte del Estado en un gran número de países, lo que está afectando fundamentalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dependen esencialmente del Estado. Estos derechos descansan en servicios que son proporcionados por el Estado, tales como servicios de salud, educación, alimentación y vestido, servicios sociales, un sistema público de seguridad social... Hemos asistido a reducciones y cortes drásticos por parte del Estado en ciertos sectores, lo que en ocasiones supone obviar lo que son auténticas obliga-

---

<sup>2</sup> Day of General Discussion: Globalization and its impact on the enjoyment of economic and social rights, Background paper submitted by the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), UN Doc. E/C.12/1998/4.



ciones jurídicas del Estado<sup>3</sup>. Esta tendencia hacia una paulatina “privatización de los Derechos Humanos” está teniendo consecuencias muy importantes en cuanto a la protección y la garantía de muchos de esos derechos<sup>4</sup>. La reducción del rol del Estado ha sido particularmente intensa en muchos de los denominados países en vías de desarrollo como resultado de la aplicación de Programas de Ajuste Estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han contribuido a agravar aún más si cabe la situación de los derechos socio-económicos en esos países, lo que acaba teniendo también consecuencias para el disfrute de los derechos civiles y políticos. La indivisibilidad e interdependencia de todos los Derechos Humanos suponen que cuando un determinado tipo de derechos sufre, los otros también acaban sintiendo los efectos. El hecho es que estos planes de ajuste macroeconómico diseñados por las instituciones de Bretton Woods han tenido repercusiones muy serias desde la óptica de los Derechos Humanos<sup>5</sup>.

En estrecha conexión con la reducción gradual del papel del Estado hemos sido testigos de un rol cada vez más relevante por parte de las Instituciones Financieras y de Comercio Internacionales (IFCIs, en particular el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial de Comercio, OMC) y las grandes Empresas Transnacionales.

El objetivo de este artículo es analizar hasta qué punto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es capaz de orientar las actividades de las instituciones que dirigen la economía mundial. Para ello, en primer lugar trataremos de elaborar un breve bosquejo de cuál ha sido la evolución del DIDH hasta nuestros días (punto II) y su estatus en relación con las IFCIs (punto III) y con las Empresas Transnacionales (punto IV). En segundo lugar, elaboraremos algunas reflexiones en torno al actual proceso de privatización que se está viviendo en la mayor parte del mundo desde el ángulo de los Derechos Humanos (punto V). En tercer lugar, abordaremos los intentos de incorporar preocupaciones por los Derechos Humanos dentro de las actividades de las IFCIs (punto VI) para, finalmente, ofrecer algunas propuestas tentativas para una efectiva transversalización de los Derechos Humanos en todas sus actividades (punto VII).

---

<sup>3</sup> No debemos olvidar al respecto el artículo 2 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que endosa claramente al Estado el deber de proteger efectivamente dichos derechos. Tal y como señala este artículo 2, “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales... para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

<sup>4</sup> BARRIOS MENDIVIL, R.: “Obstáculos para la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales”, en *Terre des hommes, El derecho a la equidad. Ética y mundialización social*, Barcelona, Icaria, 1997, pp. 83-116.

<sup>5</sup> PIGRAU I SOLE, A.: “Las políticas del FMI y del Banco Mundial y los Derechos de los Pueblos”, *Afers Internacionals*, 1995, nº 29-30, pp. 139-175.

## II. EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS<sup>6</sup>

La emergencia del individuo como sujeto de Derecho Internacional Público y, por lo tanto, como titular de ciertos derechos, tuvo lugar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y las brutales atrocidades cometidas durante el conflicto. En la Conferencia de San Francisco, celebrada en junio de 1945, una conferencia internacional con el objetivo de establecer una nueva organización internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones y que sirviera para promover la paz y la seguridad internacionales, los Derechos Humanos se convirtieron en uno de los principales puntos de discusión. Como consecuencia de la importancia otorgada a los Derechos Humanos, los mismos ocupan un lugar de privilegio en la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la nueva Organización. En el preámbulo de la Carta, al mismo tiempo que reafirman “la fe en los derechos fundamentales..., en la dignidad y el valor de la persona humana” y “en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”, los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos “a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un *concepto más amplio de la libertad*” (la cursiva es nuestra)<sup>7</sup>. Como podemos comprobar, desde los mismos inicios de la andadura de las Naciones Unidas estaba claro que el progreso social y el desarrollo deberían caminar de la mano junto a la protección y la promoción de los Derechos Humanos; asimismo, el concepto de Derechos Humanos que aparece recogido en la Carta de las Naciones Unidas es un concepto omnicomprensivo, ya que incluye tanto las libertades clásicas de carácter civil y político como los nuevos derechos de carácter socioeconómico. El principio de la indivisibilidad de todos los Derechos Humanos se encuentra inserto en el espíritu y en la ideología subyacentes a la Carta de las Naciones Unidas. Por desgracia, la Guerra Fría vino a ejercer una influencia muy negativa sobre este principio, convirtiéndose los Derechos Humanos en uno de los principales puntos de divergencia y discusión entre el Este y el Oeste.

---

<sup>6</sup> Un análisis mucho más detallado del espectacular desarrollo que ha vivido el DIDH figura en GÓMEZ ISA, F. and DE FEYTER, K. (Eds.): *International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges*, HumanitarianNet-University of Deusto, Bilbao, 2006.

<sup>7</sup> Es muy ilustrativo que el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó su famoso informe sobre la reforma de las Naciones Unidas en marzo de 2005 bajo el simbólico título “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y Derechos Humanos para todos”, subrayando que el desarrollo, la seguridad y los Derechos Humanos se han convertido en los tres pilares centrales de la labor de la ONU. Tal y como señala el Secretario General, “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los Derechos Humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”, A/59/2005, para. 17.

El artículo 1.3 de la Carta también incluye los Derechos Humanos como uno de los principales propósitos de la Organización. De acuerdo con esta disposición, es propósito de las Naciones Unidas “realizar la cooperación internacional... en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Finalmente, bajo el capítulo IX de la Carta de las Naciones Unidas, consagrado a la cooperación internacional económica y social, es necesario que mencionemos al menos dos disposiciones. El artículo 55 establece que:

“con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones..., la Organización promoverá:

... c) el respeto universal a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”.

En la misma línea, el artículo 56 dispone que “todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55”. Como podemos claramente comprobar, tanto las Naciones Unidas como organización como todos y cada uno de sus Estados-miembros asumen la obligación jurídica de respetar y promover los Derechos Humanos, que se convierten así en uno de sus objetivos esenciales.

Uno de los problemas que se derivan de estas relevantes disposiciones de la Carta que acabamos de reseñar es que no encontramos en ellas una definición de lo que hay que entender por Derechos Humanos; no existe en la Carta un catálogo de Derechos Humanos. En consecuencia, nos vemos obligados a reconocer que las referencias que figuran en la Carta a los Derechos Humanos son de carácter muy general y, de alguna manera, vagas e imprecisas. Por otro lado, esas mismas disposiciones imponen deberes jurídicos tanto a las Naciones Unidas como a sus miembros; constituyen la base legal y conceptual del impresionante desarrollo que ha vivido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir de 1945<sup>8</sup>.

El desarrollo y la profundización de la disposiciones de la Carta de las Naciones en materia de Derechos Humanos han venido de la mano de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, y que

---

<sup>8</sup> Ver en este sentido VILLÁN DURÁN, C.: *Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Trotta, Madrid, 2002.

supone un catálogo detallado de derechos tanto de carácter civil y político como de carácter económico, social y cultural. La Declaración Universal ha sido definida como una “interpretación autorizada” de las disposiciones de Derechos Humanos que aparecen en la Carta de las Naciones Unidas<sup>9</sup> y, por lo tanto, la Carta y la Declaración Universal se deben leer conjuntamente cuando queremos identificar y definir las obligaciones que en materia de Derechos Humanos deben asumir tanto las Naciones Unidas como los Estados.

La mayoría de las personas expertas defienden que al menos una parte significativa de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los que pertenecen al ámbito de los derechos civiles y políticos, se han convertido en normas de Derecho Internacional consuetudinario, es decir, en costumbres internacionales<sup>10</sup>. Esto significa que todos los Estados de la comunidad internacional se encontrarían vinculados por estas normas. En el mismo sentido, el Tribunal Internacional de Justicia ha estimado que algunas de las normas más básicas en el terreno de los Derechos Humanos han alcanzado el carácter de *obligaciones erga omnes* y, por lo tanto, pueden ser consideradas como normas de *ius cogens*, la categoría más elevada de normas en el escenario jurídico internacional<sup>11</sup>. Entre las normas que han adquirido el carácter de normas de *ius cogens* el Tribunal Internacional de Justicia ha incluido aquellas que prohíben el genocidio, la esclavitud y el comercio de esclavos, la discriminación racial, la tortura<sup>12</sup> o, más recientemente, el derecho de autodeterminación de los pueblos<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> GÓMEZ ISA, F. y ORAÁ, J.: *La Declaración Universal de Derechos Humanos*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2002.

<sup>10</sup> INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION: “Final Report on the Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law”, *ILA Report of the Sixty-Sixth Conference*, Buenos Aires (Argentina), 1994, pp. 527 y ss. En este informe final encontramos un detallado estudio relativo a la incorporación de la Declaración Universal en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, junto con referencias de naturaleza jurisprudencial.

<sup>11</sup> En consonancia con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), “es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter”. Al mismo tiempo, dada la crucial importancia que revisten estas normas, tienen efecto retroactivo, ya que, tal y como establece el artículo 64 de la mencionada Convención de Viena, “si surge una nueva norma imperativa de Derecho Internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”.

<sup>12</sup> Barcelona Traction Case, *CJ Recueil*, 1970.

<sup>13</sup> El parecer del Tribunal de La Haya en el Caso sobre Timor Oriental (*ICJ Recueil*, 1995) merece la pena ser subrayado: “en opinión de la Corte, la declaración de Portugal en el sentido de que el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal y como ha evolucionado desde la Carta de las Naciones Unidas y la práctica de las Naciones Unidas, tienen carácter *erga omnes*, es irreprochable. El principio de la autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por la jurisprudencia de la Corte...; es uno de los principios esenciales del Derecho internacional contemporáneo”. Un análisis en profundidad del alcance de este principio en el moderno Derecho Internacional se puede encontrar en GÓMEZ ISA, F.: “El derecho de autodeterminación en el Derecho Internacional contemporáneo”, en *Derecho de autodeterminación y realidad vasca*, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2002, pp. 267-318.

Un último comentario respecto de la jerarquía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene que ver con el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la prevalencia de las obligaciones jurídicas que resultan de la Carta sobre cualquier otra obligación derivada de otros tratados internacionales. De acuerdo con lo estipulado por esta disposición,

“en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, *prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta*” (la cursiva es nuestra).

El problema con la interpretación de esta norma es, una vez más, el alcance de las obligaciones de Derechos Humanos que emanan de la Carta de las Naciones Unidas. Mientras que existe un consenso emergente en torno a su aplicación a los derechos civiles y políticos más básicos, muchas dudas surgen, en cambio, cuando tratamos de aplicar esta norma a los derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de la reiteración de la proclamación del principio de la indivisibilidad de todos los Derechos Humanos<sup>14</sup>, nos vemos obligados a reconocer que el status jurídico y el desarrollo de los derechos de la segunda generación son diferentes si los comparamos con los de los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales están mucho menos desarrollados conceptual, institucional y jurisprudencialmente, siendo todavía dudoso que se hayan convertido en normas de carácter consuetudinario. Este es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando intentamos aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las Instituciones Financieras y de Comercio Internacionales, dado que sus normas y sus políticas afectan esencialmente a los derechos económicos, sociales y culturales. Todavía quedan muchos esfuerzos y mucho trabajo por hacer para clarificar y desarrollar estos derechos. Necesitamos nuevas herramientas y nuevas estrategias para abordar los problemas de implementación a los que se enfrentan estos derechos, como veremos en su momento.

---

<sup>14</sup> Este principio ha sido incorporado en diferentes instrumentos internacionales, desde la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la más reciente Declaración y Programa de Acción de Viena. De acuerdo con la Declaración de Viena, “todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los Derechos Humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, Part I, para. 5.

### III. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE COMERCIO INTERNACIONALES (IFCIs) ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las IFCIs son, desde el punto de vista jurídico, organizaciones internacionales y, por consiguiente, sujetos de Derecho Internacional Público. Ello tiene como consecuencia que, como tales organizaciones, pueden derivar derechos y obligaciones del Derecho Internacional<sup>15</sup>. Como resultado de la personalidad jurídica de las IFCIs bajo el Derecho Internacional, están sujetas a la aplicación de las normas generales de Derecho Internacional, en particular las costumbres internacionales y los principios generales de Derecho Internacional. Según la cualificada opinión de Koen de Feyter, las IFCIs tienen la obligación de respetar las reglas generales de carácter prohibitivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH): se encuentran en la obligación de no violar o no ser cómplices de la violación de normas generales del DIDH. Sin embargo, concluye, en muchas ocasiones “es difícil determinar el contenido exacto de las normas generales del Derecho de los Derechos Humanos”<sup>16</sup>, especialmente en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales, como ya hemos mencionado anteriormente.

La Carta de las Naciones Unidas ofrece la posibilidad de que el sistema de las Naciones Unidas establezca *acuerdos de vinculación* con otras organizaciones internacionales cuyas funciones guarden relación con las de la ONU. De acuerdo con el artículo 63.1 de la Carta, “el Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el artículo 57 acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la Organización”. A diferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las instituciones de Bretton Woods se convirtieron tan pronto como en 1947 en organismos especializados de las Naciones Unidas, tras la conclusión de sendos acuerdos de vinculación con la Organización. Esto significa que, formalmente, son parte del sistema de las Naciones Unidas y tienen que coordinar sus actividades con los principales órganos del sistema que tengan competencias en el terreno de la cooperación internacional social y económica<sup>17</sup>. Estos acuerdos de vin-

---

<sup>15</sup> AMERASINGHE, C.F.: *Principles of the institutional law of international organizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 240.

<sup>16</sup> DE FEYTER, K.: “The International Financial Institutions and Human Rights. Law and Practice”, in GÓMEZ ISA, F. and DE FEYTER, K. (Eds.): *International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges*, HumanitarianNet-University of Deusto, Bilbao, 2006, *op. cit.*, p. 563.

<sup>17</sup> El artículo 63.2 de la Carta de las Naciones Unidas señala que “el Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas”.

culación incorporan la obligación para los organismos especializados de ayudar en la consecución de los objetivos de la cooperación internacional de carácter económico y social tal y como viene definida en el artículo 55 de la Carta que ya hemos reseñado. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial están bajo la obligación de contribuir al respeto y a la observancia universales de los Derechos Humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha clarificado las implicaciones que, en materia de Derechos Humanos, tiene la obtención del status de organismo especializado:

“los organismos de las Naciones Unidas que participan de algún modo en el fomento de los derechos económicos, sociales y culturales deberían procurar por todos los medios posibles que sus actividades fueran plenamente compatibles con el disfrute de los derechos civiles y políticos. En términos negativos esto significa que los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que, por ejemplo, supongan la utilización de trabajo forzoso en violación de las normas internacionales, o que fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas. En términos positivos significa que, en lo posible, los organismos deberían hacerse los defensores de los proyectos y métodos que contribuyan no sólo a realizar el crecimiento económico u otros objetivos definidos de manera amplia, sino también a potenciar el disfrute de todo el abanico de Derechos Humanos”<sup>18</sup>.

A pesar de la claridad de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que acabamos de comentar y de las opiniones expresadas por el Comité que supervisa la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una verdadera coordinación entre las actividades de los órganos de las Naciones Unidas encargados del desarrollo y de los Derechos Humanos y las actividades de las instituciones de Bretton Woods ha estado ausente hasta fechas muy recientes, como veremos más adelante. En la práctica, tanto el Banco Mundial como, especialmente, el FMI, han intentado preservar al máximo su autonomía y su independencia.

---

<sup>18</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Comentario General nº 2, E/1990/23, Anexo III, para. 6.

La OMC no es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Cuando se estaba discutiendo la creación de la OMC a principios de los 90, los países industrializados trataron de evitar a toda costa cualquier tipo de vinculación formal con el sistema de las Naciones Unidas; querían una total autonomía e independencia para avanzar en la cuestión de la liberalización comercial. En el artículo 3.5 del Acuerdo de Marrakesh por el que se establecía la OMC<sup>19</sup> existe un reconocimiento de la necesidad de cooperar con algunas otras organizaciones internacionales. Tal y como establece esta disposición, “con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos”. En 1996 se procedió a la firma de un acuerdo entre la OMC y las instituciones de Bretton Woods. Es bastante claro que la OMC considera mucho más apropiado colaborar con el Banco Mundial y el FMI que con el sistema de las Naciones Unidas, aunque esta posibilidad viene también recogida en el Acuerdo que establece la OMC. Tal y como establece el artículo 5.1 de este Acuerdo, “el Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC”. La utilización del término “concertará” en esta disposición ha sido interpretada en el sentido de que entraña una “obligación formal”<sup>20</sup> para la OMC de llevar a cabo este tipo de acuerdos con otras organizaciones internacionales. La conclusión de un acuerdo de colaboración entre la OMC y las Naciones Unidas debería convertirse en una prioridad, ya que desde la óptica del desarrollo y de los Derechos Humanos no tiene ningún sentido que no existan relaciones formales entre la OMC y la organización internacional que cuenta entre sus principales objetivos con la promoción del desarrollo y los Derechos Humanos en la esfera internacional.

Por otro lado, no debemos olvidar que los Estados que forman parte de las IFCLs han asumido individualmente obligaciones jurídicas en el área de los Derechos Humanos al haber ratificado la Carta de las Naciones Unidas y un amplio número de tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos<sup>21</sup>. Como ya hemos

---

<sup>19</sup> Adoptado el 15 de abril de 1994, entró en vigor el 1 de enero de 1995.

<sup>20</sup> HOUSE, R. and MUTUA, M.: *Protecting Human Rights in a global economy. Challenges for the World Trade Organization*, International Centre for Human Rights and Democratic Development, 2000.

<sup>21</sup> A 9 de marzo de 2006, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos ha sido ratificado por 152 Estados; el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, por 154; la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, por 170; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por 180; la Convención contra la Tortura, por 141; y la Convención sobre los Derechos del Niño, por 192 (información disponible en [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch)).



mencionado, el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas subraya la obligación de los Estados de promover el respeto universal y la observancia de todos los Derechos Humanos. Esto significa que a la hora de definir y diseñar reglas y políticas globales en el marco de esas IFCIs y, sobre todo, en el momento de aplicarlas, los Estados deberían tener en cuenta que están vinculados jurídicamente por obligaciones internacionales que derivan de los instrumentos internacionales de los que son parte y de las normas generales de Derecho Internacional<sup>22</sup>. Esta es la opinión que ha sido expresada en varias ocasiones por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En el contexto del derecho a la educación, por ejemplo, el Comité ha proclamado que:

“respecto de la negociación y la ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la educación. Del mismo modo, tienen la obligación de que sus acciones como miembros de las organizaciones internacionales, *comprendidas las instituciones financieras internacionales*, tengan debidamente en cuenta el derecho a la educación”<sup>23</sup> (la cursiva es nuestra).

#### IV. EMPRESAS TRANSNACIONALES:

##### HACIA UNA MAYOR EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD

El actual proceso de globalización está teniendo como consecuencia una mayor relevancia de las denominadas Empresas Transnacionales (ETNs), que se han convertido en uno de los actores clave del nuevo escenario económico mundial. La creciente liberalización de la inversión internacional ha tenido como objetivo esencial el definir y articular los derechos de los y las inversionistas, lo que tiene como contrapartida la necesidad de equilibrar esos derechos con algunas obligaciones en relación con los individuos<sup>24</sup>. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha centrado tradicionalmente en el Estado como el principal sujeto de obligaciones, dejando a un lado a los actores privados. A lo largo de las últimas décadas se han sucedido diferentes iniciativas para exigir a las ETNs y a otros actores privados responsabilidad jurídica internacional<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Ver, entre otros, SKOGLY, S.: *The human rights obligations of the World Bank and the International Monetary Fund*, Cavendish, London, 2001; DARROW, M.: *Between light and shadow. The World Bank, the International Monetary Fund and International Human Rights Law*, Hart, Oxford, 2003.

<sup>23</sup> Comentario general nº 13, *El derecho a la educación (Artículo 13 del Pacto)*, E/C.12/1999/10, de 8 de diciembre de 1999, para. 56.

<sup>24</sup> OHCHR: *Human Rights, Trade and Investment*, E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2 July 2003.

<sup>25</sup> CLAPHAM, A.: *The Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

Algunas de las actividades de estas compañías están planteando serias dudas desde el punto de vista de los Derechos Humanos, en particular desde el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo<sup>26</sup>. En este sentido, Mary Robinson, antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha insistido, en la presentación de un informe bajo el título *Business and Human Rights*, en que “las empresas deberían apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos en sus esferas de influencia y asegurarse de que no se convierten en cómplices de abusos de Derechos Humanos”<sup>27</sup>. No son ajenos a esta preocupación ciertos escándalos en los que se han visto involucradas determinadas empresas transnacionales en los que se han comprobado abusos de los derechos laborales más básicos, explotación de mano de obra infantil, interferencias en los asuntos internos de determinados Estados, graves consecuencias medioambientales de sus actividades productivas<sup>28</sup> ...

A la hora de intentar imponer ciertas obligaciones a las ETNs, hasta la fecha se han seguido dos formas distintas de proceder: la adopción de principios y procedimientos en el marco de la denominada *Responsabilidad Social Corporativa* (RSC) y, por otro lado, intentos de establecer principios y directrices de carácter vinculante desde instancias ajenas a las propias empresas.

Las diferentes medidas para promover la RSC tienen un carácter voluntario, y descansan casi exclusivamente en la buena voluntad de las compañías. La inicia-

---

<sup>26</sup> Al respecto se está investigando bastante, entre lo que podemos destacar KAMMINGA, M.T.: ‘Holding Multinational Corporations Accountable for Human Rights Abuses: A Challenge for the EC’, en ALSTON, P. (ed.), *The EU and Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 553-569; GÓMEZ ISA, F.: ‘Las Empresas Transnacionales y sus obligaciones en materia de Derechos Humanos’, en COURTIS, C. et al (Comp.): *Protección internacional de Derechos Humanos. Nuevos desafíos*, Porrúa-ITAM, México DF., 2005, pp. 177-201; C-H. THUAN (coord.), *Multinationales et Droits de l’Homme*, Amiens, Presses Universitaires de France-Centre de Relations Internationales et des Sciences Politiques d’Amiens, 1984; S. JOSEPH, ‘Taming the Leviathans: Multinational Enterprises and Human Rights’, XLVI NETH ILR, 1999, pp. 171-203; S.R. RATNER, ‘Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility’, 111 YALE L. J., 2001, pp. 443-545.

<sup>27</sup> *Business and Human Rights: A Progress Report*, OHCHR, Geneva, January 2000, p. 2.

<sup>28</sup> Por poner tan solo un ejemplo, Amnistía Internacional ha denunciado la complicidad de varias Empresas Transnacionales del sector del petróleo con las gravísimas violaciones de los Derechos Humanos que han acaecido en Sudán. Además, dichas Empresas se benefician de esas violaciones de Derechos Humanos, dado que les allanan el camino para la explotación petrolera, en AMNESTY INTERNATIONAL: *Sudan: The Human Price of Oil*, AFR 54/04/00, 3 de mayo de 2000. Ver también *Sudan, Oil and Human Rights*, New York, Human Rights Watch, 2003, 754 páginas; *Working Document on the impact of the activities of transnational corporations on the realization of economic, social and cultural rights*, prepared by Mr. El Hadji Guissé, pursuant to Sub-Commission resolution 1997/11, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/6; Secretary-General, *The impact of activities and working methods of transnational corporations on the full enjoyment of all human rights, in particular economic, social and cultural rights and the right to development, bearing in mind existing international guidelines, rules and standards relating to the subject-matter*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/12; E. KOLODNER, *Transnational Corporations: Impediments or Catalysts of Social Development?*, UN Doc. UNRISD/OP/94/5, Geneva, November 1994; A. EIDE; H. OLE BERGESEN AND P. GOYER (eds.), *Human Rights and the Oil Industry*, Antwerp, Intersentia, 2000.

tiva más relevante en el campo internacional ha sido el denominado *Pacto Global* (*Global Compact*) lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999<sup>29</sup>. Constituye una plataforma para promover y promocionar buenas prácticas corporativas y experiencias que puedan servir de aprendizaje para las empresas en el ámbito de los Derechos Humanos, las relaciones laborales y la protección del medio ambiente. También pretende proporcionar una base para un diálogo entre las Naciones Unidas, las empresas, los sindicatos y grupos de la sociedad civil en torno a cómo mejorar las prácticas corporativas. Los problemas asociados a este tipo de iniciativas es que son de naturaleza voluntaria y no cuentan con mecanismos mínimamente exigentes de supervisión externa, pudiendo constituir en ocasiones un mero ejercicio de relaciones públicas.

La otra estrategia para incorporar las preocupaciones por los Derechos Humanos en el sector de los negocios ha sido adoptar instrumentos jurídicos que introducen principios y directrices que tienen que ser seguidas por las empresas. Desde la década de los 70 se han sucedido varias iniciativas en el ámbito de las Naciones Unidas para tratar de elaborar un Código de Conducta para las Empresas Transnacionales en el que se establezcan determinados principios a los que tienen que estar sujetas las actividades de estas empresas<sup>30</sup>. En una de las últimas versiones de este proyecto de Código de Conducta<sup>31</sup>, que desgraciadamente todavía no ha sido aprobado debido a la oposición de los países industrializados donde la mayor parte de las empresas transnacionales tienen su sede principal, se establece en su artículo 14 que “las empresas transnacionales deben respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en los países en los que realizan sus actividades...”. Asimismo, recientemente la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías<sup>32</sup> ha decidido establecer un Grupo de Trabajo encargado de examinar los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales para ver los impactos que tienen en el disfrute de los Derechos Humanos. Este Grupo de Trabajo ha celebrado sucesivos periodos de

---

<sup>29</sup> Para obtener información sobre esta iniciativa se puede consultar [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org).

<sup>30</sup> Hasta ahora se han adoptado dos Códigos de Conducta de carácter general: la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Compañías Multinacionales, aprobada el 21 de junio de 1976 y revisada en 1991 y 2000, y la Declaración Tripartita de la OIT sobre los Principios relativos a las Compañías Multinacionales y la Política Social, de 16 de noviembre de 1977. Sobre estas iniciativas consultar A. KOLK; R. VAN TULDER AND C. WELTERS, ‘International Codes of Conduct and Corporate Social Responsibility: can transnational corporations regulate themselves?’, 8 *Transnational Corporations* nº 1, April 1999, pp. 143-180.

<sup>31</sup> E/1990/94, de 12 de junio de 1990.

<sup>32</sup> *Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, y los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales*, Resolución 1998/8, 20 de agosto de 1998.

sesiones desde agosto de 1999, constatando los serios peligros que están suponiendo ciertos métodos de trabajo y ciertas actividades de determinadas empresas transnacionales para el conjunto de los Derechos Humanos<sup>33</sup>. Tras varias sesiones destinadas a discutir y avanzar en la elaboración de algún instrumento relativo a estas compañías, en agosto de 2003 el Grupo de Trabajo dio por finalizada la discusión de su Proyecto de *Normas sobre las Responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos Humanos*, y las transmitió a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, quien las aprobó en ese mismo mes<sup>34</sup> y las transmitió para su consideración a la Comisión de Derechos Humanos en su próxima sesión de 2004. El principio esencial sobre el que pivotan estas Normas es el principio de corresponsabilidad. El preámbulo del Proyecto comienza reconociendo que “aunque los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los Derechos Humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, *las empresas transnacionales y otras empresas comerciales*, en su calidad de órganos de la sociedad, *también tienen la responsabilidad* de promover y proteger los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos” (la cursiva es nuestra). Esta noción de corresponsabilidad viene desarrollada con mucha mayor precisión en la Parte A del Proyecto, consagrado a las *Obligaciones Generales*. De acuerdo con el artículo 1,

“... dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover y proteger los Derechos Humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar”.

Como podemos comprobar, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales asumen la obligación de respetar y asegurar los Derechos Humanos básicos dentro de sus respectivas esferas de influencia, debiendo prestar una atención especial a grupos vulnerables como los pueblos indíge-

---

<sup>33</sup> Informe del Grupo de Trabajo del período de sesiones encargado de examinar los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales sobre su primer período de sesiones, Presidente-Relator: Sr. El-Hadji GUISE, E/CN.4/Sub.2/1999/9, 12 de agosto de 1999, p. 5. Se puede consultar también el informe sobre los diferentes períodos de sesiones, en E/CN.4/Sub.2/2000/12, 28 de agosto de 2000; E/CN.4/Sub.2/2001/9, 14 de agosto de 2001; E/CN.4/Sub.2/2002/13, 15 de agosto de 2002 y E/CN.4/Sub.2/2003/13, 6 de agosto de 2003.

<sup>34</sup> E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 de agosto de 2003.

nas. Los principales problemas que este Proyecto de Normas está enfrentando tienen que ver con la debatida cuestión de su naturaleza jurídica y con los mecanismos que se ponen en marcha para su efectiva implementación, aspectos que a día de hoy siguen sin estar absolutamente clarificados en el texto. Desgraciadamente, la Comisión de Derechos Humanos, en su decisión 2004/116, de 20 de abril de 2004, expresó la opinión de que aunque las Normas contenían “elementos e ideas útiles” para ser tomados en consideración, como propuesta que es carecía de “autoridad legal”. En lugar de seguir insistiendo en la continuación del trabajo emprendido por el Grupo de Trabajo y la Sub-Comisión, la Comisión de Derechos Humanos solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que nombrara un Representante Especial para abordar la cuestión de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales y los Derechos Humanos<sup>35</sup>. El Representante Especial ha presentado un informe provisional a la Comisión en el cual considera que el Proyecto de Normas ha incurrido en “excesos doctrinales” y llega a la conclusión de que “las debilidades de las Normas las convierten en una *distracción* más que en una base sobre la cual seguir avanzando”<sup>36</sup> (la cursiva es nuestra). Como vemos claramente, el futuro de las Normas es bastante incierto.

Lo que queda meridianamente claro del análisis que acabamos de exponer es que, dado el creciente poder que están adquiriendo las ETNs en una economía cada vez más globalizada, existe una necesidad urgente de que se les puedan exigir responsabilidades por sus impactos en el disfrute de los Derechos Humanos. Deberíamos apoyar las diferentes iniciativas que se están tomando tanto a escala nacional como internacional.

## V. LA PRIVATIZACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS<sup>37</sup>

Las privatizaciones se han convertido en un ingrediente esencial del actual proceso de globalización, implicando el asumir por parte de actores privados diversos servicios y funciones que tradicionalmente han sido cubiertas por el Estado. Los programas de privatización han proliferado enormemente a lo

---

<sup>35</sup> Resolución 2005/69. El 25 de julio de 2005, el ECOSOC adoptó la decisión 2006/73 en la que aprobaba la petición de la Comisión y, tres días más tarde, el 28 de julio de 2005, el Secretario General nombró a John Ruggie, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, como su Representante Especial.

<sup>36</sup> E/CN.4/2006/97, 22 de febrero de 2006, paras. 59 y 69.

<sup>37</sup> Un análisis mucho más extenso y profundo se puede encontrar en DE FEYTER, K. and GÓMEZ ISA, F. (Eds.): *Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation*, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005.

largo y ancho del planeta en las dos últimas décadas. Siguiendo en este punto a W. L. Megginson, uno de los más relevantes expertos en este campo, “la privatización ha sido una de las corrientes principales en la política y en la economía mundiales durante los últimos 25 años, y ha contribuido a reducir drásticamente el papel de las empresas públicas tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo”<sup>38</sup>.

Hasta ahora, el enfoque que ha primado a la hora de analizar la privatización se ha centrado exclusivamente en los aspectos económicos, asumiendo que las diferentes formas de privatización son la mejor manera para incrementar la eficiencia económica, la flexibilidad y la calidad en la provisión de servicios<sup>39</sup>; la privatización también se ha contemplado como una forma de elevar los ingresos por parte del Estado y de reducir la interferencia gubernamental en la economía, lo que abre las puertas a una mayor competencia<sup>40</sup>. Esta aproximación económica no ha tenido en cuenta en absoluto las posibles implicaciones que para los Derechos Humanos puede tener un proceso de privatizaciones<sup>41</sup>. Sólo muy recientemente se han comenzado a examinar con carácter crítico los posibles impactos en los Derechos Humanos, cuando los procesos de privatización han empezado a afectar a sectores como la salud, la educación, la seguridad social o la provisión de agua. Tanto parte de la comunidad académica<sup>42</sup> como activistas<sup>43</sup> e, incluso, algunos órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han expresado sus preocupaciones por los eventuales impactos que los procesos de privatización pueden llegar a tener para un adecuado disfrute de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al considerar el informe inicial de la República checa

---

<sup>38</sup> W.L. MEGGINSON, ‘Privatization in perspective: the last twenty years’, en *Teoría y Política de privatizaciones: su contribución a la modernización económica. Análisis del caso español*, Madrid, Fundación SEPI, 2004, p. 45.

<sup>39</sup> *Building Better Partnerships; The Final Report of the Commission on Public Private Partnerships*, London, IPRP, 2001, p. 253.

<sup>40</sup> Para los principales argumentos a favor de un proceso intenso de privatizaciones ver W.L. MEGGINSON: *op. cit.*

<sup>41</sup> Es sorprendente que cuando examinamos la literatura existente sobre privatizaciones, la dimensión que tiene que ver con los Derechos Humanos se encuentra absolutamente ausente. Existen algunos análisis sobre los efectos de la privatización en la distribución de la riqueza, pero no desde el ángulo de los Derechos Humanos. Acerca del impacto de la privatización sobre la distribución de la riqueza ver V.V. RAMANADHAM, ‘The impacts of privatization on distributional equity’, en V.V. RAMANADHAM (ed.), *Privatization and Equity*, London, Routledge, 1995, pp. 1-34; E. SHESHINSKI AND L.F. LOPEZ-CALVA, ‘Privatization and its Benefits: Theory, Evidence and Challenges’, en K. BASU; P.B. NAYAK AND R. RAY (eds.), *Markets and Governments*, New Delhi, Oxford University Press, 2003.

<sup>42</sup> A. CHRISTMAS, *Report of the Seminar on Privatization of basic services, Democracy and Human Rights*, Community Law Centre, University of Western Cape, 2-3 October 2003; E. DRENT, ‘Privatization of basic services in Canada: Some recent experiences’, 4 *ESR Review* nº 4, 2003.

<sup>43</sup> V. SHIVA, *Water Wars: Privatization, pollution and profit*, Cambridge, MA: South End Press, 2002; M. GAVALDA, ‘La guerra del agua en Bolivia’, en *Agua, ¿Mercancía o Bien Común?*, Alikornio Ediciones, Barcelona, 2003, pp. 323-345.

sobre la implementación del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), identificó en sus Observaciones Finales como uno de los principales elementos de preocupación el que “la insuficiencia de los sistemas de seguridad social durante el proceso de reestructuración y privatización haya tenido efectos negativos para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular por parte de los grupos más desfavorecidos y marginados”<sup>44</sup>. Como resultado de esta preocupación creciente, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas convocó un Día de Discusión General en septiembre de 2002 para examinar en detalle “El Sector privado como prestador de servicios y su papel en la implementación de los derechos de la infancia”, hasta ahora una de las aproximaciones más sistemáticas y completas del impacto de los procesos de privatización en los Derechos Humanos en general y en los derechos de la infancia, en particular. Al mismo tiempo que el Comité daba la bienvenida al papel que desempeñan los actores no estatales, incluyendo las ONG y las empresas, declaró que estaba “cada vez más preocupado por la tendencia hacia una mayor privatización, incluso en aquellos servicios que se dirigen a cubrir necesidades básicas como la salud, la educación o el agua”<sup>45</sup>. Esta llamada de atención por parte del Comité surge por la tendencia en los procesos de privatización a dejar en manos privadas no sólo las empresas de carácter público, sino también servicios esenciales que descansan en Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Todas estas preocupaciones han sido resumidas de la siguiente forma por Sihaka Tsemo<sup>46</sup>, Representante Regional para el Sur de Africa de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

1. El establecimiento de un sistema a diferentes velocidades, con un sector privado centrado en las capas más favorecidas de la población y un sector público con crecientes problemas de financiación dirigido a atender las necesidades de los más pobres.
2. La potenciación de una “fuga de cerebros” del sector público al sector privado, atraídos por mayores salarios y mejores infraestructuras.
3. Un énfasis en los objetivos económicos y de rentabilidad a expensas de objetivos de carácter social.

---

<sup>44</sup> *Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Czech Republic*, E/C.12/1/Add.76, 5 de junio de 2002, para. 10.

<sup>45</sup> *Day of General Discussion, The Private Sector as Service Provider and its Role in Implementing Child Rights*, 31<sup>st</sup> Session, UN Doc. CRC/C/121, 20 de septiembre de 2002, p. 4.

<sup>46</sup> S. TSEMO, ‘Privatization of basic services, democracy and human rights’, 4 *ESR Review* n<sup>o</sup> 4, 2003.

4. Un sector privado cada vez más poderoso que puede acabar poniendo en serios apuros el rol del Estado como el principal responsable de la garantía de los Derechos Humanos al subvertir los sistemas reguladores mediante la presión política y la cooptación de los reguladores.

Otros signos de preocupación tienen que ver con la posibilidad de una desigual distribución de los recursos y de los servicios asociada a los procesos de privatización<sup>47</sup>, que afecta fundamentalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, siendo Rusia y algunos otros países en transición los ejemplos más elocuentes.

En principio, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos guarda una postura neutral en materia de privatizaciones, no se posiciona ni a favor ni en contra de la privatización<sup>48</sup>. Esta opción ha sido mantenida firmemente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su famoso Comentario General nº 3 sobre la naturaleza de las obligaciones de los Estados parte que resultan del PIDESC. El Comité observa que el Pacto es neutral en lo concerniente a los sistemas económicos, siempre que el Estado de que se trate sea democrático y se muestre comprometido con la protección de los derechos consagrados en el Pacto. Tal y como señala en el párrafo 8 del mencionado Comentario General,

“El Comité observa que el compromiso de ‘adoptar medidas... por todos los medios apropiados’... ni exige ni excluye que cualquier tipo específico de gobierno o de sistema económico pueda ser utilizado como vehículo para la adopción de las medidas de que se trata, con la única salvedad de que todos los Derechos Humanos se respeten en consecuencia. Así pues, en lo que respecta a sistemas políticos y económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en el *laissez-faire*, o en ningún otro tipo de planteamiento específico. A este respecto, el Comité reafirma que los derechos reconocidos en el Pacto pueden hacerse efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos, a condición únicamente de que la

---

<sup>47</sup> A. STEINHERR, ‘The Future of Privatization’, en *Teoría y Política de Privatizaciones: su contribución a la modernización económica. Análisis del caso español*, Madrid, Fundación SEPI, 2004, p. 955.

<sup>48</sup> P. HUNT, ‘The international human rights treaty obligations of state parties in the context of service provision’, en *Day of General Discussion, The Private Sector as Service Provider...*, op. cit., pp. 4-5.



interdependencia e indivisibilidad de los dos conjuntos de Derechos Humanos... se reconozcan...”<sup>49</sup>.

Como podemos ver claramente, no se excluye la privatización, siempre que no vaya en detrimento de una efectiva realización de todos los Derechos Humanos. Esta visión también la encontramos en la Convención sobre Derechos del Niño (1989). El artículo 3.1, uno de las disposiciones clave de la Convención, al establecer el principio básico que debe presidir los derechos de la infancia, el *interés superior del niño*, establece lo siguiente: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o *privadas* de bienestar social..., una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño” (la cursiva es nuestra). La Convención está asumiendo que algunos de los servicios que afectan a los derechos de la infancia pueden ser prestados por instituciones privadas. Lo importante es que estas instituciones también se guíen por el principio del *interés superior del niño* a la hora de prestar sus servicios.

Aunque, como acabamos de ver, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es neutro respecto de la privatización, tenemos que descubrir hasta qué punto puede poner límites o condiciones a la forma en cómo un determinado proceso de privatización se lleva a cabo. El Estado no puede abdicar de las responsabilidades que se le derivan de las obligaciones en materia de Derechos Humanos que ha asumido; la privatización no libera a los Estados de sus obligaciones<sup>50</sup>. Los Estados siguen siendo los principales responsables de las obligaciones en materia de Derechos Humanos, y tienen que respetar, proteger y cumplir todos los Derechos Humanos<sup>51</sup>. En suma, el Estado es el *último responsable* de la garantía de los Derechos Humanos. Esta visión fue enfatizada por las Directrices de Maastricht sobre las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo con estas significativas Directrices,

---

<sup>49</sup> Comentario General nº 3, *La índole de las obligaciones de los Estados Parte (artículo 2.1 del Pacto)*, E/1991/23, Anexo III, para. 8.

<sup>50</sup> Esta postura ha sido subrayada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el *Caso Costello-Roberts*. En este caso, el Tribunal declaró al Reino Unido responsable por actos que habían tenido lugar en una escuela de titularidad privada. Tal y como sostuvo el Tribunal de Estrasburgo, el Estado no puede “... evadir su responsabilidad delegando sus obligaciones a actores privados o a individuos”, en *Costello-Roberts v. United Kingdom*, ECtHR, Series A, Nº. 48, para. 27. Una posición muy similar ha sido mantenida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en sus Observaciones Finales al informe inicial presentado por Israel. El Comité declaró que “un Estado parte no puede eludir las obligaciones que derivan del Pacto privatizando funciones gubernamentales”, E/C.12/1/Add. 27, 4 de diciembre de 1998, para. 11.

<sup>51</sup> N. RODEMANN, *Financing the Right to Water*, Friedrich Ebert Stiftung, Side event to the 60<sup>th</sup> Session of the UN Commission on Human Rights, 22 March.

“desde el final de la Guerra Fría hemos asistido a una tendencia en prácticamente todas las regiones del mundo en el sentido de reducir el papel del Estado y confiar en el mercado para la solución de los problemas relativos al bienestar humano... Ya no podemos dar por sentado que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales depende exclusivamente de la actuación del Estado, aunque, desde el punto de vista del Derecho Internacional, el Estado continúa siendo el *último responsable* de la garantía de realización de esos derechos...”<sup>52</sup> (la cursiva es nuestra).

Tomando en debida consideración esta idea del Estado como el último responsable de las obligaciones en materia de Derechos Humanos, es obvio que el Estado tiene el derecho y el deber de imponer límites y condiciones a los procesos de privatización<sup>53</sup>. Este deber nos conduce a la necesidad de llevar a cabo un enfoque de Derechos Humanos de la privatización; las preocupaciones relativas a los Derechos Humanos deben estar presentes en todo proceso privatizador desde sus mismos inicios. Hay dos aspectos en los que el Estado tiene algo que decir: en primer lugar, la propia decisión de privatizar un determinado servicio que afecta a obligaciones de Derechos Humanos; en segundo lugar, el funcionamiento del servicio una vez que ha pasado a manos privadas.

En lo que concierne a la decisión de privatizar un determinado servicio, el Estado debe sopesar con mucho cuidado sus potenciales implicaciones en materia de Derechos Humanos. Los Estados deberían llevar a cabo una *evaluación del impacto en los Derechos Humanos* antes de tomar la decisión de privatizar. Paul Hunt ha defendido con fuerza la necesidad de estudios de impacto en los Derechos Humanos; todo proceso de privatización “debería ir precedido por un estudio de impacto independiente, objeto y público en el derecho de que se trate”<sup>54</sup>. El elemento clave es hasta qué punto el Estado puede manejar el proceso de privatización de tal manera que asegure los Derechos Humanos básicos y si ese mismo Estado puede garantizar que los actores pri-

---

<sup>52</sup> *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights* (1997), in *Human Rights. Maastricht Perspectives*, Maastricht, Maastricht Centre for Human Rights, 1999, p. 22, para. 2.

<sup>53</sup> Según el artículo 2.3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986, “los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”.

<sup>54</sup> P. HUNT, *op. cit.*, p. 5.

vados también respeten esos derechos<sup>55</sup>. Esto ha llevado a Bertrand Charrier, Director Ejecutivo de Green Cross International y con una amplia experiencia en el área de la provisión de agua y la protección de los recursos naturales, a defender que si el Estado no está en una posición que le permita supervisar todo el proceso de privatización (algo que es muy común en muchos países en vías de desarrollo), contando además con una potente sociedad civil que pueda controlar la dirección del proceso, la decisión de privatizar no se debería tomar<sup>56</sup>. Todo el proceso de toma de decisiones alrededor de una privatización debería ir acompañado de una total transparencia y una adecuada disseminación de información<sup>57</sup>. La única forma en virtud de la cual la sociedad civil puede participar en el proceso<sup>58</sup>, elemento esencial en cualquier proceso de privatización, es mediante una plena transparencia y una adecuada información que garantice el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”<sup>59</sup> que está reconocido en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Una plena disseminación de la información es también una forma de tratar de evitar la corrupción, un elemento que, desgraciadamente, se encuentra presente en muchos procesos de privatización<sup>60</sup>. Finalmente, cuando se va a tomar la decisión de privatizar un servicio, todas aquellas personas que se van a ver afectadas deberían tener acceso a todos los recursos jurídicos necesarios para poder desafiar esa decisión y poder obtener las oportunas compensaciones si es que se demuestra algún impacto negativo<sup>61</sup>.

Uno de los problemas es que los Estados no son totalmente soberanos y autónomos a la hora de tomar la decisión de subcontratar ciertos servicios como la educación, la asistencia sanitaria o la provisión de agua; en ocasiones, simplemente implementan políticas que han sido diseñadas e impuestas por las Instituciones

---

<sup>55</sup> *Day of General Discussion, The Private Sector as Service Provider and its Role in Implementing Child Rights*, op. cit., p. 6.

<sup>56</sup> B. CHARRIER, entrevista en *Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo Humano*, Primavera 2004, p. 63.

<sup>57</sup> Acerca de la importancia que reviste la información en los procesos de privatización ver G. MORTENSEN, *Consuming Democracy? The Right to Know*, Institute of Human Rights of the University of Deusto, EMA, July 2002, p. 64.

<sup>58</sup> El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos viene contemplado en el artículo 25 a) del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

<sup>59</sup> La ausencia de una información suficiente y adecuada para una consulta apropiada a la población afectada es una de las principales críticas realizadas a los procesos de privatización. Esta opacidad informativa ha caracterizado los recientes intentos por parte de la municipalidad de Quito (Ecuador) de privatizar el servicio de provisión de agua, en R. RODRIGUEZ, ‘Municipio de Quito, Ecuador, quiere privatizar el agua’, *Tintají*, 24 de agosto de 2004 (este artículo está disponible en: [www.altercom.org/article1930.html](http://www.altercom.org/article1930.html)).

<sup>60</sup> J.L. MONTES, ‘Hasta dónde puede llegar la privatización’, en *Teoría y Política de Privatizaciones: su contribución a la modernización económica. Análisis del caso español*, Madrid, Fundación SEPI, 2004, p. 228.

<sup>61</sup> Comentario General nº 15, *El derecho al agua (artículos 11 y 12 del PIDESC)*, E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, para. 56.

Financieras Internacionales, en particular el Banco Mundial y el FMI, en el marco de los Programas de Ajuste Estructural que han sido recetados a la mayor parte de los países en vías de desarrollo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha recordado insistentemente a los Estados que negocian acuerdos internacionales que este tipo de acuerdos no deben afectar negativamente a la realización de los derechos de carácter económico, social y cultural<sup>62</sup>. En el contexto del derecho a la educación, el Comité ha proclamado que

“respecto de la negociación y la ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la educación. Del mismo modo, tienen la obligación de que sus acciones como miembros de las organizaciones internacionales, comprendidas las instituciones financieras internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la educación”<sup>63</sup>.

Por otro lado, las propias IFIs deberían también tener en cuenta en sus programas y políticas sus consecuencias en términos de disfrute de derechos básicos. En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas “recomienda encarecidamente a los Estados parte, al FMI, al Banco Mundial y a otras instituciones financieras y bancos regionales a que tomen debidamente en consideración los derechos de la infancia... a la hora de negociar los préstamos y los programas”<sup>64</sup>.

El segundo elemento que es necesario analizar es el funcionamiento del servicio privatizado. Una vez que la decisión de privatizar ya ha sido tomada, el Estado tiene que imponer ciertas condiciones a los actores privados que se van a encargar del servicio. Para la imposición de estas condiciones, un acuerdo o contrato detallado con las empresas u organizaciones proveedoras del servicio es crucial; el contrato se convierte en “la herramienta clave para la exigencia de responsabilidad, ya que es la única base en virtud de la cual los agentes privados pueden incurrir en responsabilidad”<sup>65</sup>. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y

---

<sup>62</sup> Comentario General nº 12, *El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del PIDESC)*, E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, para. 41; Comentario General nº 14, *El derecho al más alto nivel posible de salud (artículo 12 del PIDESC)*, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, para. 39, y *El derecho al agua...*, op. cit., para. 60.

<sup>63</sup> Comentario General nº 13, *El derecho a la educación (artículo 13 del PIDESC)*, E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, para. 56.

<sup>64</sup> *Day of General Discussion, The Private Sector as Service Provider and its Role in Implementing Child Rights*, op. cit., p. 21.

<sup>65</sup> G. MORTENSEN, op. cit., p. 21.

Culturales de las Naciones Unidas ha establecido varias condiciones generales que los Estados tienen que tomar en consideración a la hora de implementar los derechos socioeconómicos. Estas condiciones también se pueden aplicar a los procesos de privatización que estamos analizando. Esto tiene como consecuencia que los actores privados que están operando un determinado servicio también tienen que cumplir estos requisitos, y que el Estado tiene que supervisar si efectivamente lo están haciendo o no. De acuerdo con la opinión del Comité<sup>66</sup>, estas condiciones son las siguientes:

1. *Disponibilidad*: los diferentes derechos económicos, sociales y culturales tienen que estar disponibles en una cantidad suficiente.
2. *Accesibilidad*: los derechos tienen que ser accesibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
  - a. *No discriminación*: los derechos tienen que ser accesibles para todas las personas, pero en especial para los grupos más vulnerables de la sociedad.
  - b. *Accesibilidad física*: los derechos tienen que estar al alcance físico de todos los sectores de la población, en particular para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.
  - c. *Accesibilidad económica (asequibilidad)*: los derechos socioeconómicos deben estar al alcance de todas las personas. Los Estados deben asegurar que los servicios son asequibles para todas las personas, incluyendo a los grupos excluidos<sup>67</sup>.
  - d. *Acceso a la información*: la accesibilidad debe incluir también el derecho a buscar, recibir y difundir todo tipo de información que concierna a los servicios que hayan sido privatizados.

---

<sup>66</sup> La mejor definición de estos criterios viene de la mano del Comentario General nº 14 relativo al derecho a la salud, en *El derecho al más alto nivel posible de salud (artículo 12 del PIDESC)...*, op. cit., para. 12. Existe un criterio adicional establecido por el Comité en lo que concierne al derecho al agua; se trata del criterio de la *sostenibilidad*, teniendo en cuenta no sólo las necesidades de las generaciones presentes, sino también las necesidades de las generaciones futuras, en *El derecho al agua...*, op. cit., para. 11.

<sup>67</sup> La principal preocupación en torno a la privatización de servicios es hasta qué punto se respeta el criterio de la asequibilidad. Existen varios ejemplos que demuestran que la privatización, especialmente en el sector del agua, acaba afectando al acceso de los grupos más marginados de la sociedad a los servicios privatizados, en J. SHULTZ, 'Privatization versus human rights: Lessons from the Bolivian Water Revolt', 4 *ESR Review* nº 4, November 2003; N. ROSEMAN, *The Human Right to Water under the conditions of trade liberalization and privatization. A study of the privatization of water supply and wastewater disposal in Manila*, Berlin, Friedrich Ebert Stiftung, 2003.

3. *Aceptabilidad*: el funcionamiento de los servicios debe ser culturalmente apropiado, tomando especialmente en cuenta las necesidades de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas.
4. *Calidad*: la calidad de los derechos es un elemento crucial; la privatización no debería conllevar una disminución en la calidad de los servicios dispensados.

Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone tres tipos de obligaciones a los Estados parte del Pacto: la obligación de respetar, de proteger y de cumplir (*respect, protect* y *fulfil*, en versión inglesa)<sup>68</sup>. La *obligación de respetar* exige que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La *obligación de proteger* requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la satisfacción de tales derechos. Por último, la *obligación de cumplir* demanda de los Estados que adopten todas las medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otro carácter para dotar de plena efectividad a los derechos de segunda generación.

En lo que toca a los procesos de privatización, la obligación de proteger es la más relevante, dado que requiere que los Estados prevengan las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales por terceras partes. Los Estados tienen que “velar por que la privatización... no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad”<sup>69</sup> de los servicios prestados. Por lo tanto, los Estados tienen que ejercer la *debida diligencia* (*due diligence*) en la supervisión y el control de la gestión de los servicios por parte de los actores privados. Esta obligación de ejercer la debida diligencia viene exigida por la Directrices de Maastricht que antes hemos mencionado cuando señalan que:

“la obligación de proteger incluye la responsabilidad del Estado de asegurar que las entidades privadas o los individuos, incluyendo las empresas transnacionales sobre las que ejerzan jurisdicción, no priven a los individuos de sus derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados son responsables de las violaciones de dichos derechos que resulten de su falta de *diligencia debida* en el control de la conducta de los mencionados actores no estatales”<sup>70</sup> (la cursiva es nuestra).

---

<sup>68</sup> Ver al respecto *El derecho al más alto nivel posible de salud (artículo 12 del PIDESC)...*, *op. cit.*, para. 33.

<sup>69</sup> *Ibid.*, para. 35.

<sup>70</sup> Maastricht Guidelines, *op. cit.*, para. 18.

Esta obligación de la debida diligencia impone a los Estados la necesidad de implementar un *esquema regulador* para prevenir cualquier tipo de abuso por parte de actores privados<sup>71</sup>. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “para impedir esos abusos debe establecerse un sistema regulador eficaz de conformidad con el Pacto... que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento”<sup>72</sup>.

Al mismo tiempo, el Comité “es de la opinión de que corresponde a cada Estado Parte una *obligación mínima* de asegurar la satisfacción de por lo menos *niveles esenciales* de cada uno de los derechos”<sup>73</sup> (la cursiva es nuestra). El establecimiento de esta obligación mínima y de los niveles esenciales tiene como corolario que un Estado parte no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar su incumplimiento; esta obligación es de naturaleza no derogable. Un determinado proceso de privatización no podría conducir a la violación del umbral mínimo establecido para ciertos derechos; el Estado debe asegurar que los elementos esenciales de cualquier derecho están garantizados para el conjunto de la población.

Otro aspecto relevante es que existe la presunción de que *medidas de carácter regresivo* no se pueden tomar a la luz del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales<sup>74</sup>. Esta fuerte presunción nos lleva a defender que un cierto proceso de privatización no podría tener como resultado el deterioro del disfrute de los derechos socioeconómicos, siendo el Estado el último responsable de su garantía. En este sentido, “todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo... requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga”<sup>75</sup>.

---

<sup>71</sup> Además de este esquema regulador, el Comité de Derechos del Niño “anima a los proveedores privados de servicios a desarrollar sus propios *mecanismos de auto-regulación* que incluya un sistema de control y supervisión...” (la cursiva es nuestra), en *Day of General Discussion, The Private Sector as Service Provider and its Role in Implementing Child Rights*, op. cit., p. 17.

<sup>72</sup> *El derecho al agua...*, op. cit., para. 24.

<sup>73</sup> *La índole de las obligaciones de los Estados parte...*, op. cit., para. 10.

<sup>74</sup> El artículo 2.1 del PIDESC se refiere a la *realización progresiva*. En función de esta progresividad, las Directrices de Maastricht defienden que “las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden tener lugar mediante... la adopción de cualquier medida regresiva que reduzca el alcance de cualquiera de los derechos garantizados”, en *Maastricht Guidelines*, op. cit., p. 25, para. 14 e).

<sup>75</sup> *La índole de las obligaciones de los Estados parte...*, op. cit., para. 9.

## VI. INTENTOS DE INCORPORAR LAS PREOCUPACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS IFCIs

Como ya sabemos, el desarrollo y los Derechos Humanos han sido tradicionalmente dos mundos completamente separados, con diferentes lógicas y diferentes instrumentos y estrategias. Esta situación explica en parte el aislamiento de las IFCIs y de otras instituciones de las Naciones Unidas que trabajan en el campo del desarrollo en relación con los organismos de Derechos Humanos. Este status quo comenzó a modificarse en los años 70 y, especialmente, en la década de los 80. En los 70, los países del Tercer Mundo, bajo el paraguas del Grupo de los 77 (G-77), ejerció una enorme presión para ganar adeptos y apoyos en favor del establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). A pesar de que en la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas no utilizaba todavía un lenguaje de Derechos Humanos, expresaba algunas preocupaciones que se pueden relacionar con una concepción amplia de los mismos. En primer lugar, la Asamblea General hizo un llamamiento a favor de “la plena y efectiva participación, sobre una base de igualdad, de todos los países en la solución de los problemas económicos mundiales en beneficio común de todos los países”<sup>76</sup>, teniendo en mente la exclusión y marginación que enfrentaban, y siguen enfrentando actualmente, los países pobres en el seno de las instituciones de Bretton Woods. Por su parte, nos encontramos con que por primera vez en la historia un órgano de las Naciones Unidas aboga por “la reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas transnacionales mediante la adopción de medidas en beneficio de la economía nacional de los países donde esas empresas realizan sus actividades, sobre la base de la plena soberanía de esos países”<sup>77</sup>. En los años 80, tras la explosión de la crisis de la deuda, las instituciones de Bretton Woods comenzaron a involucrarse en la resolución de este problema de proporciones mundiales con el diseño de los famosos Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Inmediatamente después de la aplicación de los primeros PAEs, algunas voces empezaron a elevar críticas por los impactos sociales de estos Programas en la vida diaria de millones de personas en los países del Sur, abogando por un *Ajuste con Rostro Humano*. Los órganos de Derechos Humanos de las Naciones

---

<sup>76</sup> Resolución 3201 (S-VI), de 1 de mayo de 1974, principio 4.c).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Principio 4. g). Este llamado está en el origen de los esfuerzos por adoptar un Código de Conducta para las ETNs. Debemos tener en cuenta que los diferentes borradores del Código de Conducta que ha estado elaborando las Naciones Unidas hacen referencias explícitas a la necesidad de proteger los Derechos Humanos básicos por parte de estas empresas.



Unidas comenzaron a prestar una creciente atención a los efectos de los PAEs en el disfrute de los Derechos Humanos, contribuyendo así a una mejor comprensión de la compleja pero necesaria relación entre el desarrollo y los Derechos Humanos. Es en este contexto que fue emergiendo progresivamente la idea de concebir el desarrollo como un derecho humano autónomo y separado. Algunos relevantes académicos y académicas del Tercer Mundo pusieron de manifiesto la urgente necesidad de proclamar una tercera generación de Derechos Humanos, los denominados derechos de la solidaridad, que complementase las dos generaciones ya existentes, la de derechos civiles y políticos y la de derechos económicos, sociales y culturales. Tras un largo y difícil proceso de discusión y negociación en el marco de un grupo de trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1981, la *Declaración sobre el derecho al desarrollo* fue aprobada por una abrumadora mayoría<sup>78</sup> en la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1986<sup>79</sup>. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta Declaración es el claro vínculo entre desarrollo y Derechos Humanos. La promoción y la protección de todos los Derechos Humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, pasaron a convertirse en un ingrediente sin el cual no se puede entender un proceso de desarrollo. El desarrollo no es posible sin un respeto escrupuloso de todos los Derechos Humanos. En el preámbulo de la Declaración sobre el derecho al desarrollo encontramos la primera referencia a la crucial relación entre las dos esferas. Tal y como leemos en esta disposición,

“todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; ...a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos Derechos Humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros Derechos Humanos y libertades fundamentales”.

---

<sup>78</sup> La votación final sobre esta Declaración es muy ilustrativa de las posiciones de los diferentes países de la comunidad internacional. 146 Estados votaron a favor, 8 se abstuvieron (la República Federal de Alemania, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, Japón, Dinamarca, Islandia e Israel) y, finalmente, sólo un país, Estados Unidos, votó en contra. Un detallado estudio sobre el derecho al desarrollo figura en GÓMEZ ISA, F.: *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

<sup>79</sup> Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

Al mismo tiempo, en la parte sustantiva de la Declaración existe un pronunciamiento esencial en lo concerniente a la evolución conceptual del desarrollo. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, “la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”. Esta relevante disposición ha allanado el camino para la emergencia del concepto de Desarrollo Humano a finales de los 80 bajo los auspicios de académicos como Amartya Sen<sup>80</sup> y el paraguas institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para un concepto multidimensional y omnicomprensivo del desarrollo los Derechos Humanos han pasado a ser un elemento esencial e irrenunciable<sup>81</sup>.

Este nueva aproximación a las cuestiones de desarrollo también ha tenido impacto en las Instituciones Financieras Internacionales, al menos sobre el papel. El Banco Mundial y, en menor medida, el FMI han ido incorporando paulatinamente consideraciones de Derechos Humanos en sus políticas y en sus programas. Otra importante razón para este cambio de paradigma tiene que ver con las crecientes críticas que han recibido las IFIs por su papel en el diseño e implementación de políticas económicas y financieras de alcance global, y por el impacto de estas políticas desde la óptica del desarrollo y de los Derechos Humanos. En este sentido, el Consenso de Washington articulado e implementado por las instituciones de Bretton Woods está atravesando actualmente por unos momentos de fuerte cuestionamiento. El enfoque actual del desarrollo de estas instituciones viene expresado en el *Marco Omnicomprensivo del Desarrollo (Comprehensive Development Framework)*<sup>82</sup>, en el cual se subraya la interdependencia de todos y cada uno de los elementos del desarrollo. De acuerdo con este enfoque, “no podemos adoptar un sistema en el que lo macroeconómico y lo financiero sean considerados como elementos que no tienen nada que ver con los aspectos estructurales, sociales y humanos, y viceversa. La integración de cada uno de estos ingredientes es imperativo tanto en la esfera nacional como entre los actores globales”.

La integración de las consideraciones de Derechos Humanos en el discurso del Banco Mundial es algo cada vez más visible. Por ejemplo, en una declaración

---

<sup>80</sup> Ver, entre muchos otros, un libro en el que recapitula sus teorías acerca de las complejidades de la relación entre el desarrollo y los Derechos Humanos, en SEN, A.: *Development as Freedom*, Anchor Books, New York, 1999.

<sup>81</sup> ALSTON, P. and ROBINSON, M. (Eds.): *Human Rights and Development. Towards Mutual Reinforcement*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

<sup>82</sup> WOLFENSHON, J.: *A proposal for a comprehensive development framework*, 1999, disponible en [www.worldbank.org/cdf](http://www.worldbank.org/cdf).

efectuado por el Banco con ocasión del 50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos encontrar las siguientes reflexiones: “la creación de condiciones para el logro de los Derechos Humanos es uno de los objetivos centrales e irrenunciables del desarrollo...; el Banco contribuye directamente a la realización de muchos de los derechos reconocidos en la Declaración Universal”<sup>83</sup>. Más recientemente, en una conferencia de presentación del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006, bajo el ilustrativo título de *Equidad y Desarrollo*, Roberto Dañino, un miembro muy cualificado del Banco, expresó la opinión de que los Derechos Humanos “son la misma esencia del trabajo del Banco”<sup>84</sup>, una auténtica declaración de principios.

Como respuesta a esta creciente atención a los aspectos relacionados con los Derechos Humanos, el Banco Mundial ha aprobado varias Políticas y Directrices Operativas que tienen que ser tomadas en consideración por el personal del Banco a la hora de ejecutar proyectos en los que está involucrado el Banco. Aunque ninguna de estas Políticas Operativas va dirigida expresamente a la cuestión de los Derechos Humanos, la mayoría de ellas se refieren a aspectos que son esenciales por una concepción amplia de los mismos. Por ejemplo, se han adoptado Políticas Operativas sobre reducción de la pobreza, sobre pueblos indígenas o sobre estudios de impacto medioambiental... En opinión de Koen de Feyter, aunque estas Políticas Operativas no utilizan una terminología de Derechos Humanos, proporcionan un cierto grado de protección de derechos, tanto en el área de los derechos civiles y políticos (se promueve la participación de los grupos afectados por los proyectos) como en el área de los económicos, sociales y culturales (la Política Operativa sobre reducción de la pobreza exige “un mayor acceso a la educación, a la atención sanitaria y a otros servicios sociales...”)<sup>85</sup>.

Otro avance significativo por parte del Banco Mundial fue la creación del *Panel de Inspección* en 1993 por el Directorio Ejecutivo del propio Banco para supervisar el cumplimiento de las regulaciones internas por parte del personal del Banco. El Panel es un órgano independiente que proporciona un espacio al que recurrir a la ciudadanía a título particular o a grupos que consideran que han sido afecta-

---

<sup>83</sup> GAETA, A. and VASILARA, M.: *Development and Human Rights: the role of the World Bank*, Washington D.C., the World Bank, 1998, pp. 2-3.

<sup>84</sup> World Bank Legal Forum 2005, disponible en <http://siteresources.worldbank.org/INTTOPLEGFOR/Resources/LegalForum2005.doc>.

<sup>85</sup> DE FEYTER, K.: “The International Financial Institutions and Human Rights...”, *op. cit.*, p. 572.

dos adversamente, o es probable que lo sean, por algún proyecto financiado por el Banco Mundial<sup>86</sup>. Su creación responde básicamente a fuertes presiones por parte de la sociedad civil para incrementar la transparencia y la responsabilidad en los proyectos que lleva a cabo el Banco. Aunque el Panel de Inspección está muy lejos de ser perfecto (es un procedimiento de naturaleza administrativa más que judicial, el Directorio Ejecutivo juega un importante rol en las diferentes fases del procedimiento, no ofrece compensación a las personas que se ven afectadas negativamente por las actividades del Banco<sup>87</sup>...), ha significado un paso importante en la buena dirección. En primer lugar, ha servido para demostrar que la sociedad civil tiene algo que decir a la hora de influenciar a las instituciones globales para que presten una mayor atención a las consideraciones humanas y sociales. Por otro lado, también nos ha enseñado que la transparencia, la responsabilidad y los Derechos Humanos pueden ser incorporadas perfectamente por las Instituciones Financieras y de Comercio Internacionales en sus políticas y en sus prácticas. Esta experiencia del Panel de Inspección, con sus luces y sus sombras, debería ser seguida por otras instituciones.

Uno de los últimos pasos en la evolución de la que estamos siendo testigos es la creciente atención que se está prestando a los asuntos relacionados con el comercio internacional y sus potenciales impactos en un adecuado disfrute de los Derechos Humanos. Comercio, por un lado, y Derechos Humanos, por el otro, se han ignorado por completo hasta hace muy poco tiempo. Según la opinión de una de las más relevantes abogadas de la necesidad de una mayor integración de estos dos ámbitos, Caroline Domen<sup>88</sup>, es sólo a partir de 1998, en el contexto de las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuando los diferentes actores comienzan a ser conscientes de las interconexiones existentes. Desde entonces, el denominado movimiento anti-globalización, ONG de desarrollo, ONG de Derechos Humanos, los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sindicatos, la comunidad académica... han prestado una cada vez mayor atención a los efectos que las negociaciones sobre

---

<sup>86</sup> Para un análisis en profundidad del funcionamiento del Panel ver ALFREDSSON, G. and RING, R. (Eds.): *The Inspection Panel of the World Bank: A Different Complaints Procedure*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2001. Un estudio llevado a cabo por el propio Banco se encuentra en *Responsabilidad y Transparencia en el Banco Mundial. Panel de Inspección, los Primeros 10 años*, Banco Mundial, Washington D.C., 2003.

<sup>87</sup> DE FEYTER, K.: "The International Financial Institutions...", *op. cit.*, pp. 579 and 580.

<sup>88</sup> DOMMEN, C.: "The WTO, international trade and human rights", in WINDFUHR, M. (Ed.): *Beyond the Nation-State. Human Rights in Times of Globalisation*, The Global Publications Foundation, 2005. Caroline Dommen trabaja para Trade-Human Rights-Equitable Economy, una ONG muy activa en este campo. Información sobre la organización y sobre su trabajo se puede encontrar en [www.3dthree.org](http://www.3dthree.org).

los aspectos relacionados con el comercio internacional, tanto en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC (el Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios, *GATS*; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, *TRIPS Agreement*...) como fuera de ella, podrían tener en el disfrute de los Derechos Humanos por parte de muchas personas, en particular en los países del Sur.

Un aspecto que alertó sobremanera a los diferentes actores que acabamos de mencionar fue el posible impacto negativo que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) podría tener en el derecho al acceso a las medicinas para todos a un precio asequible. Una campaña global fue lanzada por varias ONG internacionales, apoyadas por algunos Gobiernos clave como Brasil, la India o Sudáfrica, para promover una cierta flexibilidad en la aplicación del ADPIC a aquellas medicinas que son esenciales para la protección efectiva del derecho a la salud, especialmente el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables. Esta campaña constituyó un gran éxito, consiguiendo un enorme eco en la opinión pública y un fuerte apoyo para forzar a la OMC a que adoptase la *Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública* el 14 de noviembre de 2001 en el marco de su Cuarta Conferencia Ministerial<sup>89</sup>. A la vez que pone de manifiesto que “la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevas medicinas”, se declara consciente “de las preocupaciones acerca de sus efectos en los precios”. Es por ello que la Declaración de Doha subraya que “el ADPIC no debería evitar que los Estados Miembros puedan adoptar medidas para proteger la salud pública... El Acuerdo debería ser interpretado e implementado de tal forma que sirva de apoyo al derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a las medicinas para todos”. Aunque subsisten algunos interrogantes sobre la implementación de la Declaración de Doha, debemos sacar algunas lecciones de este interesante proceso: una muy buena recogida de datos y una muy buena investigación cuantitativa sobre el impacto del ADPIC en los precios de las medicinas básicas, especialmente aquéllas que se dirigen a tratar de VIH/SIDA; una muy bien diseñada estrategia de campaña; el apoyo de algunos Gobiernos clave tanto a nivel interno como en el ámbito internacional; la complicidad de varios órganos de las Naciones Unidas, incluyendo algunos organismos de Derechos Humanos (la Sub-Comisión para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos...).

---

<sup>89</sup> WT/MIN(01)DEC/2, 20 de noviembre de 2001.

## **VII. ALGUNAS PROPUESTAS PARA INCORPORAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS IFCIs**

En este último apartado voy a tratar de ofrecer algunas ideas para intentar diseñar estrategias para integrar efectivamente los Derechos Humanos dentro de las normas, las políticas y las prácticas de las IFCIs, algo que es muy necesario si queremos que las instituciones que tienen las riendas de la economía global se conviertan en actores significativos para aquellos países y aquellas personas que más lo necesitan. Las propuestas que detallo a continuación son tan sólo algunas reflexiones tentativas que someto a discusión y debate para su progresivo enriquecimiento por parte de todas aquellas personas y colectivos interesados en estas cuestiones.

### **Crucial importancia de las acciones en la esfera nacional**

Una de las mejores formas de tratar de incorporar y transversalizar los Derechos Humanos y los aspectos relacionados con el desarrollo humano en las dinámicas de las instituciones globales es intentar influir en los actores que definen las políticas en el marco nacional. Esta necesidad se siente especialmente en el momento actual, cuando las negociaciones comerciales se están trasladando a foros regionales y bilaterales, una vez que los países industrializados han caído en la cuenta de que en el marco de la OMC, dadas las presiones que vienen de la sociedad civil y de algunas poderosas coaliciones formadas por países en desarrollo, es mucho más difícil alcanzar acuerdos que sean totalmente favorables a sus intereses.

### **Necesidad de un análisis basado en Derechos Humanos de las normas, las políticas y las prácticas de las IFCIs**

Necesitamos elaborar y aplicar un enfoque de derechos a las normas, políticas y prácticas de las instituciones globales. Ya hemos visto que la manera más común que tienen las IFCIs de afectar a los Derechos Humanos y al desarrollo es mediante la limitación de la capacidad de los gobiernos para regular o para tomar las medidas necesarias para proteger los Derechos Humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, a nivel nacional. Tanto la tendencia hacia una creciente privatización de servicios básicos como la liberalización del comercio y de la inversión pretenden recortar la capacidad del Estado de regular a favor de los Derechos Humanos, el desarrollo y las necesidades de los grupos más vulnerables. Pero, al mismo tiempo, no deberíamos olvidar que los Estados han asumido un gran número de obligaciones relativas a la protección y la promoción de los Derechos

Humanos, como hemos visto; el Estado tiene el derecho y el deber de regular a favor de los Derechos Humanos de todas las personas<sup>90</sup>. Debemos subrayar una vez más que el Derecho de los Derechos Humanos prevalece sobre cualquier otro régimen jurídico. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha propuesto algunos criterios que pueden ser muy útiles para aquellos que diseñan y aplican políticas de alcance global. Estos criterios han sido analizados cuando abordamos en su momento los procesos de privatización desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y pueden resumirse de la siguiente forma: *disponibilidad* (los diferentes derechos tienen que estar disponibles en cantidad suficiente); *accesibilidad* (derechos accesibles y asequibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación); *aceptabilidad* (necesidad de tomar en cuenta si los servicios son apropiados culturalmente) y, finalmente, *calidad* de los derechos ofertados.

### Necesidad de una adecuada metodología para los estudios de impacto

En ocasiones es difícil identificar y medir el impacto de las normas y las políticas globales en el disfrute de los Derechos Humanos, en particular en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Necesitamos perfeccionar nuestros métodos y herramientas de investigación, con una adecuada combinación de investigación cuantitativa y análisis cualitativo. Por esa razón, necesitamos una metodología apropiada para mensurar los impactos. En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha animado a los Estados a que “lleven a cabo estudios de impacto públicos, independientes y transparentes de las políticas de liberalización sobre los Derechos Humanos, mediante procesos participativos en los que se consulte a los individuos y grupos afectados”. En el mismo sentido, la Alta Comisionada “alienta a los Estados a que utilicen los estudios de impacto como base para las negociaciones conducentes a una mayor liberalización en el marco de la OMC. Cuando estos estudios de impacto no existan, recomienda a los Estados adoptar una aproximación con cautela antes de aceptar nuevos compromisos y que los impactos se establezcan claramente”<sup>91</sup>.

### Necesidad de una mejor utilización de los mecanismos existentes para la protección de los Derechos Humanos

Como es sabido, existe todo un conjunto de mecanismos, tanto a nivel universal como en los ámbitos regionales y estatales, para la protección y la promo-

---

<sup>90</sup> OHCHR: *Human Rights, Trade and Investment*, E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2 July 2003.

<sup>91</sup> OHCHR: *Liberalization of Trade in Services and Human Rights*, E/CN.4/Sub.2/2002/9, 25 June 2002.

ción de los Derechos Humanos: los informes periódicos que tienen que presentar los Estados ante los órganos creados por los tratados internacionales de Derechos Humanos<sup>92</sup>, las demandas individuales, los comentarios generales elaborados por los comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas... Hasta hace muy poco tiempo, estos órganos han prestado una muy escasa atención a cómo las políticas globales afectan a los Derechos Humanos. En este sentido, necesitamos diseñar estrategias efectivas de llevar ante estos órganos esas políticas y prácticas relativas a la liberalización en la medida en que afecten adversamente a determinados Derechos Humanos<sup>93</sup>. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que los mecanismos existentes para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales no se encuentran tan desarrollados como los que existen para los derechos civiles y políticos. Hay una urgente necesidad de desarrollar mecanismos e instrumentos efectivos para la protección de los derechos de la segunda generación. En este sentido, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales que se lleva negociando desde los años 90 debería convertirse en una realidad lo antes posible.

### Necesidad de una mejor utilización de los mecanismos de arreglo de controversias existentes en las IFCIs

Tanto en el Banco Mundial (*Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones*, CIADI; ICSID en versión inglesa) como en el marco de la OMC (el *Panel* y el *Organo de Apelación*) existen mecanismos muy evolucionados de arreglo de controversias. También aquí observamos la necesidad de hacer uso de estos mecanismos e incorporar consideraciones de Derechos Humanos en sus deliberaciones mediante la presentación de solicitudes para actuar como *Amicus Curiae*. Las ONG y las Organizaciones Internacionales con mandatos en el terreno de los Derechos Humanos deberían aprovechar la oportunidad para introducir preocupaciones relativas a los Derechos Humanos en los procesos de toma de decisión de estas instituciones.

---

<sup>92</sup> Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a El Salvador tras la presentación de su informe en 2004 “que tenga en cuenta con carácter sistemático el interés superior del niño cuando negocie acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y los implemente en el Derecho interno”, CRC/C/15/Add.232, 30 de junio de 2004.

<sup>93</sup> OVETT, D.: “Intellectual property, development and human rights: how human rights can support proposals for a World Intellectual Property Organization (WIPO) development agenda”, *Policy Brief*, nº 2, February 2006, p. 3 (available at [www.3dthree.org](http://www.3dthree.org)).



Un ejemplo reciente es muy ilustrativo de cómo consideraciones de Derechos Humanos se pueden invocar en los procedimientos ante estos mecanismos de solución de controversias. El 19 de mayo de 2005, un Tribunal Arbitral del CIADI permitió la presentación de un escrito como *Amicus Curiae* por parte de un grupo de ONG en el *Caso Aguas Argentinas et al versus Argentina*. Ha sido la primera vez que un Tribunal del CIADI toma una decisión de esta naturaleza, decisión que contaba con el rechazo de las compañías privadas involucradas en el caso. Aguas Argentinas es un consorcio de empresas que asumió el control y la gestión del sistema de aguas del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires en 1993 sustituyendo a una empresa pública. El consorcio presentó una demanda ante el CIADI porque consideraba que no había recibido una justa compensación por las inversiones efectuadas debido, en parte, a determinadas decisiones tomadas por el Gobierno de Argentina. Cinco ONG plantearon que este caso incluía algunas cuestiones de interés público que afectaban a los derechos fundamentales de las personas que vivían en esa área metropolitana. El Tribunal del CIADI aceptó que, por las razones que esgrimían las ONG, el escrito de *Amicus Curiae* estaba justificado. A continuación reproducimos las relevantes palabras pronunciadas por el Tribunal aceptando por primera vez que las consideraciones de Derechos Humanos pueden y deben ser tenidas en cuenta en este tipo de casos:

“el factor que otorga a este caso un interés público es que la controversia sobre la inversión gira en torno a los sistemas de distribución y saneamiento de las aguas de una amplia área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y las municipalidades que la rodean. Esos servicios gestionan las necesidades básicas de millones de personas y, como resultado, pueden involucrar toda una variedad de complejas cuestiones de Derecho Público y de Derecho Internacional, *incluyendo consideraciones de Derechos Humanos*. Cualquier decisión que recaiga en este caso... puede afectar al funcionamiento de esos sistemas y, por lo tanto, a las personas a las que sirven” (la curativa es nuestra).

Aunque este caso todavía está pendiente de resolución, abre una puerta muy interesante para poder introducir “consideraciones de Derechos Humanos” dentro de los procesos de toma de decisiones de este tipo de órganos.

## Necesidad de un diálogo serio entre los diferentes movimientos sociales y las ONG

Necesitamos crear alianzas estratégicas para poder defender mejor los derechos económicos, sociales y culturales, los más afectados por las políticas globales de las que venimos hablando. Para que esto realmente pueda ocurrir necesitamos abrir espacios de diálogo e interacción entre los diferentes movimientos sociales que trabajan sobre cuestiones globales tanto en el Norte como en el Sur: ONG de desarrollo, grupos ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, movimientos de mujeres, grupos indígenas, sindicatos... Necesitamos una mejor comprensión de cómo los diferentes ámbitos están inextricablemente unidos e interrelacionados. De acuerdo con Eitan Felner<sup>94</sup>, Director del Center for Economic, Social and Cultural Rights, necesitamos una adecuada combinación de investigación cuantitativa, análisis cualitativo y estrategias de defensa de los Derechos Humanos y de presión política. Solamente si somos capaces de incorporar pensamiento creativo y acciones estratégicas estaremos en disposición de avanzar en nuestro objetivo de que otro mundo sea posible.

---

<sup>94</sup> Ponencia presentada en un Seminario de personas expertas organizado por FRIDE y por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto para analizar la reciente creación del Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos y los desafíos que se le presentan, 6 y 7 de abril de 2006, Casa de América, Madrid. Algunas de las ponencias y las principales conclusiones del seminario figuran en ALMQVIST, J. Y GÓMEZ ISA, F. (Eds.): "El Consejo de Derechos Humanos: Oportunidades y desafíos", Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, nº 40, 2006.